



Chocó es uno de los departamentos más afectados.

Mujeres afro, las más afectadas por violencia sexual

Con la información recopilada respecto a la racialidad de las mujeres víctimas de violencia sexual, las mujeres afrocolombianas han sido las más afectadas por este tipo de violencia, así lo afirmó ayer el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en un comunicado.

Esta mayor afectación “se debe, entre otras razones, a la ubicación histórica de las mujeres afrocolombianas en territorios estraté-

gicos para los actores armados que han impuesto con sus acciones rasgos ideológicos racistas, clasistas y sexistas”, detalló el director del CNMH, Darío Acevedo Cardona.

Los departamentos de Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Antioquia reportan las mayores cifras de mujeres afrocolombianas víctimas de violencia sexual.

Este tipo de violencia “también implica que los hombres armados se otorgan un derecho de propiedad, que se ha configurado histó-

ricamente sobre los cuerpos de las mujeres”, agrega el coordinador del Enfoque de Género del CNMH, Marlon Acuña.

De acuerdo con el informe ‘Expropiar el cuerpo: seis historias de violencia sexual en el conflicto armado’, difundido en 2018, todos los actores armados implicados en el conflicto armado colombiano han ejercido violencia sexual bajo distintas modalidades en la disputa por el poder en territorios estratégicos para su accionar. *Efe*

Por: César A. Marín C.
Especial para EL HERALDO

A pesar de haber sido violentada por paramilitares, hace casi 23 años, Beatriz García es hoy un ejemplo de valentía y liderazgo para los habitantes de la Zona Bananera.

La mujer que tuvo que ‘vestir’ la violencia sexual de mapaná

En el marco del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual durante el conflicto, este medio presenta la historia de Beatriz, una mujer que en la actualidad tiene 56 años y relata cómo ha logrado sobreponerse a la violencia que sufrió sin que eso sea obstáculo para soñar un mejor futuro no solo para ella, sino también para sus vecinos.

Ella nació en Baranoa, Atlántico. Su infancia transcurrió en medio de limitaciones económicas, por lo que cuando ella tenía 10 años su familia se fue a vivir a Orihueca, un corregimiento de Zona Bananera, en Magdalena.

Allí, su madre, Luz Marina de García, vendía legumbres en la plaza de mercado, al tiempo que su padre, Marcos García, era el chofer de un camión; mientras que Beatriz cuidaba de sus hermanos.

Se casó a los 20 años y tuvo cuatro hijos (tres mujeres y un hombre), pero no le fue bien en el matrimonio y se separó, lo que la llevó a ser cabeza de hogar. Posterior a ese episodio, ella junto a otras familias hicieron las diligencias y consiguieron cuatro predios que estaban en Pueblo Viejo.

“Nos fuimos 126 familias de Orihueca, 3 mujeres y 70 hombres para trabajar los terrenos”, dice Beatriz, quien para la fecha tenía 33 años.

El terreno estaba a tres horas en bicicleta de Orihueca, los hombres trabajaban y las tres mujeres, entre ellas Beatriz, cocinaban.

Al tiempo que estaba en el terreno, los paramilitares comenzaron a entrar para pedir que les dieran café o comida. Los guerrilleros del Eln también se movían por la zona, pero no entraban al predio. “Los jefes paramilitares traían los animales y nos tocaba cocinarles”.

LA TRAGEDIA. El comandante en la zona era conocido como ‘Cuatro Cuatro’, y el segundo al mando era Pedro*. Este último comenzó a acercarse a Beatriz. Le decía: “Yo necesito una mujer así para que me administre lo que tengo; le compro una casa para que la maneje”. A lo cual ella respondía: “Yo no vine acá a buscar marido, yo estoy trabajando es por mis hi-

jos y sacar este proyecto adelante”.

Un día, estando Beatriz con su amiga bajo un samán, llegó Pedro en compañía de otros y les dio la orden de que se llevaran a Ana. Le dijo a Beatriz que a él ninguna mujer se le negaba y que ella no iba a ser la excepción. Empezó a golpearla. Ante sus gritos, apareció su amigo Luis a defenderla y en ese momento los subalternos de Pedro arremetieron contra Luis y lo golpearon. Le dijeron: “Si le duele lo que le va a pasar a ella, se dará cuenta de lo que le va a pasar a usted por sapo”.

Ese día, mientras Pedro violentaba sexualmente a Beatriz, sus subalternos les hacían lo mismo a Ana y a Luis. Se acercaba la mitad del año de 1999.

“No quería que nadie diferente a Ana y a Luis supieran lo que había pasado, pero el que más guardaba silencio era Luis, quizá por aquello del machismo, porque él también había sido violado”, dice Beatriz.

Pasaron algunas semanas y Beatriz se fue a lavar ropa a una quebrada. Estando allí llegó Pedro. Ella cree que él seguramente puso a alguno de sus subalternos a seguirla.

“Ese día me volvió a violentar y me apuñaleó”. Es decir, al tiempo que la violaba la apuñaleaba, dice.

Al llegar a la casa sangrando, su madre le preguntó qué le había pasado y ella le inventó que en el caño se le había aparecido una serpiente mapaná y que por salir corriendo se había cortado al rozar unos matorrales. “Solo le mostré las piernas y ella me curó. No le dije la verdad. Eso pasó en septiembre de 1999”.

Pasadas cerca de siete semanas, dos subalternos de Pedro llegaron al rancho de Beatriz y le dijeron que se tenía que ir con ellos. La llevaron secuestrada al campamento donde él se



Beatriz García sentada en la terraza de su casa en Magdalena.

encontraba y allí nuevamente la violentó sexualmente. “Esta vez me quemaba con un cigarrillo. Fue horrible, nunca voy a olvidar todo eso”.

Al regresar tomó la decisión de abandonar Villa Claudia e irse con su mamá, hermanas e hijos para Orihueca. Poco a poco comenzó el rumor de los abusos sexuales por parte de los paramilitares a otras mujeres, hombres y niños, y el predio comenzó a quedar solo. Posteriormente se comprobó que fueron 37 personas las violentadas sexualmente en Villa Claudia (30 mujeres, tres niñas, dos niños y dos hombres).

Ante esta situación decidió irse con sus hijos para Baranoa, a donde su padre había regresado unos años atrás. Decidió estudiar en el vecino municipio de Sabanalarga durante cuatro semestres para ser normalista. Estando allí se enteró de que tanto ‘Cuatro Cuatro’ como Pedro habían muerto, al parecer, a manos de sus propios jefes.



En el terreno Beatriz y la comunidad reciben capacitaciones para elaborar abonos verdes.

REGRESANDO A ORIHUECA.

En 2002 regresó a Orihueca. Conoció a una persona de la que se enamoró. Comenzó a trabajar en la Alcaldía de Zona Bananera como profesora voluntaria. Ganó un concurso para ser docente en el corregimiento Santa Rosalía y, con su liderazgo, presentó un proyecto a Ecopetrol para la construcción de un colegio para los niños, el cual fue aprobado.

En 2010, un grupo de 30 familias de las que salieron desplazadas de Villa Claudia crearon la organización Fundación de Víctimas de Desplazamiento Forzado (Fundapad), que de 30 familias que inicialmente la integraban, pasaron a 112, entre ellas algunas de las que formaban parte de Asovic años atrás.

En 2015 Beatriz fue indemnizada por la Unidad para las Víctimas por vio-

lencia sexual en el marco del conflicto. “Ese dinero me sirvió para comprar un lote acá en Orihueca, construí un apartamento”. Hoy está a la espera de indemnizaciones por otros hechos victimizantes como desplazamiento y secuestro.

RETOMANDO EL TRABAJO EN EL TERRENO.

A inicios de 2022, luego de 22 años de haber salido, las familias volvieron a los predios de Villa Claudia. De nuevo limpiaron y gestionaron para buscar que el Estado les adjudicara esas tierras, donde construyeron una especie de laboratorio para la elaboración de abonos verdes, abonos de lombricultura y el manejo de semillas.

En la actualidad, Beatriz tiene un negocio en su casa. Vende fritos, almuerzos y comidas rápidas con su hija. De los fritos, la especialidad es la arepa e huevo y las empanadas que a las 7 de la mañana ya están agotadas.

Debido a la Ley de Justicia y Paz, hace años Beatriz y varias mujeres que habitaron en Villa Claudia asistieron a una audiencia en la que José Gregorio Mangones, conocido como ‘Carlos Tijeras’, paramilitar que reemplazó a ‘Cuatro Cuatro’ cuando lo mataron, pidió perdón.

“En mi caso yo le recordé lo que habían hecho conmigo, y él, a pesar de no ser el autor directo, reconoció ese delito. También aceptó que él había ordenado el asesinato de varios paramilitares por ‘sobrepasarse’ con la población civil. Dios habla del perdón y yo no puedo vivir llena de odio, por eso decidí perdonarlos”.

Agrega que aunque ningún dinero del mundo le devolverá la dignidad que le arrebataron durante el tiempo que la agredieron, hoy enfrenta la vida con certidumbre, contenta de ver crecer a sus siete nietos y a sus cuatro hijos como profesionales.

*Nombres cambiados.

Las cifras de la violencia sexual durante 64 años de conflicto armado

Según el Registro Único de Víctimas, en los siete departamentos de la Costa Caribe hay 9.924 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. De ese número 851 son hombres, 8.972 mujeres y cerca de 100 son miembros de la comunidad Lgbti.

Por otra parte, cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica revelan que en 64 años de conflicto en el país

15.893 personas han sido víctimas de violencia sexual, de las cuales, 15.823 son civiles, 68 combatientes y dos de las que no se tiene información.

De igual forma, destaca que en 873 municipios han ocurrido estos hechos, siendo los departamentos más afectados Antioquia, con 2.926 víctimas, seguido de Magdalena con 1.771 y Nariño con 1.001.

Las estadísticas indican que entre los

años de 1991 y 2000 se tuvieron registros de que 3.978 personas habrían sido violentadas sexualmente en el marco del conflicto; entre 2001 y 2010 hubo la mayor cantidad de víctimas (8.067), y entre 2011 y 2020 se tienen registros de 2.309 casos.

Los grupos paramilitares habrían sido los principales perpetradores causando afectación a 5.280

personas, seguido de la guerrilla que violentó a 4.907 personas; mientras que grupos desmovilizados habrían dejado 1000 víctimas, agentes del Estado habrían cometido 327 de los hechos y otros grupos tendrían implicación en 53 casos.

Entre tanto, grupos armados habrían cometido 356 de los hechos y 3970 casos no han podido ser atribuidos a ningún grupo.